



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1343

3 de Agosto de 2018

FORTALECE LA INTEGRIDAD PÚBLICA

BOLETÍN 11883-06

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1343

3 DE AGOSTO DE 2018

ÍNDICE

FORTALECE LA INTEGRIDAD PÚBLICA

BOLETÍN 11883-06

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	7
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	15
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.....	30
ANEXO I.....	31
ANEXO II.....	33
ANEXO III.....	35
ANEXO IV	37

FORTALECE LA INTEGRIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11883-06

REFERENCIA	Fortalece la integridad pública
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Senado
MINISTERIOS	Del Interior y Seguridad Pública, De Hacienda, De Justicia y Derechos Humanos, y Secretaría General de la Presidencia
INGRESO	6 de julio de 2018
ARTICULADO	8 artículos permanentes y 4 transitorios

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

La iniciativa presidencial complementa y fortalece el marco normativo sobre integridad pública, cuyo principio rector -denominado principio de probidad- está consagrado expresamente en nuestra Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

La probidad no es una simple recomendación, sino que es un deber cuya transgresión puede acarrear responsabilidades y sanciones. La función pública debe ejercerse en beneficio del interés general y no de intereses particulares, por lo que la regulación debe promover y velar por el cumplimiento de lo anterior.

Las materias abordadas por el proyecto son el fortalecimiento de la meritocracia -cuya discusión está vigente en Chile desde 1996, año en que se emitió el informe de la Comisión Nacional de Ética Pública encargado por el ex Presidente Frei-, la regulación del post empleo en el servicio público, la prevención de conflictos de intereses, el fortalecimiento de la integridad pública en la labor parlamentaria, entre otras materias.

Diversas disposiciones del proyecto de ley en estudio avanzan en el sentido correcto y se hacen cargo de manera adecuada de aminorar los espacios de conflictos de interés. No obstante, otras regulaciones, en la forma propuesta, merecen mayor análisis pues aún cuando están bien orientadas, generan inquietudes y asimetrías respecto de la regulación vigente. En particular, se deben estudiar con cuidado las barreras de entrada o salida del cargo para evitar otros costos asociados, gravosos para la democracia, pues la función pública y la política requieren de líderes preparados que cuenten con las competencias necesarias ■■■

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley propone modificar diversos cuerpos legales.

PRINCIPALES MODIFICACIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

- a) **Perfeccionamiento de las normas de ingreso para desempeñar funciones en la Administración del Estado:** se modifica la regulación relativa a la contratación de parientes y familiares de altas autoridades públicas. Se incorpora el deber del Servicio Civil de emitir un informe sobre la calificación profesional e integridad del nuevo funcionario, cuyo contenido deberá ser sometido al conocimiento del Consejo de Alta Dirección Pública. La propuesta busca que prime el mérito personal por sobre las relaciones de parentesco.
- b) **Inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública:** se hace más estricta la regulación, incorporándose nuevas inhabilidades de ingreso a la Administración.
- c) **Incompatibilidades en la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República:** se fortalecen las incompatibilidades y se establece una disposición que impide a los abogados que dejen de cumplir labores en la Contraloría y en algún otro servicio de la administración centralizada o descentralizada del Estado, realizar presentaciones ante dicho organismo, durante el plazo de un año contado desde el cese de las funciones, respecto de asuntos en que hubieren intervenido.
- d) **Deberes de abstención:** se regula dicho deber en casos de conflictos de intereses, haciendo más estricta aún la regulación, con el objeto de cautelar la imparcialidad de las autoridades y funcionarios. Así, entre otras modificaciones, se agrega el interés personal que pueda tener el conviviente civil del funcionario como causal para que surja el deber de abstenerse de participar de una votación o decisión.
- e) **Modificación de las normas post empleo entre el sector privado y el sector público:** siguiendo las recomendaciones del Consejo Asesor Anticorrupción (2015), se establecen nuevas inhabilidades para autoridades y funcionarios, quienes no podrán prestar -por el plazo de un año contado desde el cese en el cargo- ningún servicio, realizar lobby y/o gestión de intereses, ni adquirir participación en la propiedad en ciertas entidades fiscalizadas y cumpliéndose ciertos requisitos. Dichas prohibiciones, si se transgreden, acarrearán sanciones.

PRINCIPALES MODIFICACIONES RELATIVAS AL CONGRESO NACIONAL

- a) **Perfeccionamiento de la inhabilitación en caso de conflictos de intereses:** se incluye la prohibición de que los miembros de ambas cámaras puedan intervenir y votar en asuntos en los que un parlamentario tenga interés personal, incluyendo a diversos familiares entre los sujetos que generan deber de abstención. Asimismo, se regula la forma de promover y materializar el deber de abstención que afecta a los miembros del Congreso, dando un rol protagónico a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria. Para cumplir con su función, cada Cámara tendrá una Unidad Técnica de Apoyo.
- b) **Inhabilitades para desempeñar funciones en el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional o en cualquier servicio común:** se establece una nueva inhabilitación para el desempeño en esos organismos, antes de un año desde el cese de la función.
- c) **El correcto uso de las asignaciones parlamentarias:** se limita el uso de fondos, evitando que se asignen para remuneraciones de ciertos familiares. Asimismo, la prohibición se extiende a determinados parientes de los funcionarios relacionados a la actividad del Congreso Nacional. De esta manera, el articulado establece que dichas asignaciones deben ser utilizadas exclusivamente para el ejercicio de la función parlamentaria.
- d) **Regulación del ejercicio de la labor parlamentaria y del tránsito entre el sector público y el sector privado de los parlamentarios:** se establece dedicación exclusiva y prohibición de realizar lobby o gestión de intereses por 12 meses desde el cese de las funciones. Sin perjuicio de lo anterior, podrán desempeñar labores académicas por hasta un máximo de 12 horas a la semana ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ANTECEDENTES

En las últimas décadas, diversas han sido las iniciativas aprobadas en nuestro país para promover, directa o indirectamente, mayor transparencia e integridad en la vida pública. Algunos ejemplos son la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 20.285 de 2008), la Ley del Lobby (Ley 20.730 de 2014) y la Ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública (Ley 20.730 de 2016), entre otros.

No cabe duda que profundizar y perfeccionar, de tiempo en tiempo, nuestra regulación sobre esta materia fortalece nuestra democracia y agrega sentido y valor a la función pública. Asimismo, constituyen un medio para generar y recuperar las confianzas en el quehacer del aparato estatal.

Es necesario destacar que el presente mensaje presidencial es también una señal positiva para el Congreso Nacional, dado que recoge diversas modificaciones legales impulsadas por mociones parlamentarias de distintos sectores políticos.

No obstante sus efectos positivos, es importante que en la deliberación de estas iniciativas se consideren también los potenciales desincentivos que pueden producir para atraer talentos al ejercicio de la función pública. Por ello, al proponer y debatir estas reformas resulta en extremo importante considerar el conjunto de regulaciones ya dictadas al efecto, además de aquellas otras iniciativas cuya discusión está instalada en el debate nacional -como las remuneraciones de los altos directivos públicos y parlamentarios-, y los efectos colaterales de las propuestas. Las discusiones aisladas y paralelas

podrían generar efectos contraproducentes en términos de desincentivar el ingreso de los mejores profesionales al empleo público.

- **Contratación de parientes para desempeñarse en la administración del Estado**

El proyecto de ley establece, adecuadamente, un filtro o evaluación de mérito en la contratación de parientes de determinadas autoridades en la administración del Estado. Se busca despejar dudas respecto a que estas contrataciones respondan a razones de calificación, aptitudes y experiencias para el cargo y no al parentesco que lo une con la autoridad respectiva. Así, el proyecto dispone que además de tener que cumplir con los requisitos generales para ingresar a la administración del Estado y los exigidos para el cargo específico, para contratar al cónyuge, conviviente civil y determinados parientes del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento o contratación deberá solicitar, previamente, un informe a la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). El informe versará sobre la experiencia del candidato para el cargo, los conocimientos asociados a la función en la que se le pretende nombrar o contratar, así como la integridad de la persona cuyo nombramiento o contratación se pretende. El mencionado informe

deberá ser sometido a conocimiento del Consejo de Alta Dirección Pública.

La fórmula propuesta es adecuada. Prohibir de plano la contratación de parientes no habría sido acertado al privar al Estado de contar con personas que, más allá del parentesco, puedan tener cualidades y méritos suficientes para servir al país. No es la existencia de la relación la que debe impedir la contratación, sino que ésta se efectúe en contra o sin considerar los intereses generales de la nación. El proyecto de ley, no obstante, no establece expresamente que el informe de la DNSC sea de carácter público, debiendo serlo para poder ejercer el debido escrutinio al respecto a la luz de los objetivos perseguidos.

Otro asunto que surge en relación con esta materia es la posible asimetría que se genera respecto de lo que dispone actualmente la LBGAE para el caso de la contratación de parientes de autoridades y funcionarios directivos de un organismo de la administración del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive. La regulación actual señala que tales personas están inhabilitadas para ingresar a esos cargos en la administración del Estado. Lo anterior, para evitar que se produzca entre parientes una relación entre subalterno y jefatura. A su vez, el proyecto de ley no es claro respecto a lo que sucedería si se da una situación similar respecto de las autoridades y parientes que se vienen señalando en la iniciativa, salvo respecto de los ministros. Esta posible asimetría debiera abordarse con mayor profundidad en la discusión a fin de advertir si es necesario introducir ciertos perfeccionamientos al efecto.

• Regulación del tránsito del sector público al sector privado

Como antecedente, la respuesta regulatoria más común para lidiar con los conflictos de interés que pueden darse tras dejar el empleo público es introducir periodos de carencia o “*cooling off periods*”. Se trata de limitaciones de tiempo impuestas a ex autoridades o funcionarios públicos para aceptar un empleo en el sector privado. Estas restricciones se fundamentan en la noción de que un intervalo de tiempo entre los empleos es relevante para disminuir la intensidad del eventual conflicto de interés. Se asume que, transcurrido el lapso de tiempo del caso, la habilidad del funcionario público para influir en el proceso de toma de decisiones en el sector público, y beneficiar a su nuevo empleador, disminuye sustancialmente.

Se observa, en todo caso, que el tipo de restricción varía entre¹ países o estados (en el caso de naciones federales) existiendo, asimismo, naciones o estados en que no existe regulación al efecto o en que se regula a través de “*soft law*” (códigos de conducta y autorregulación). Los periodos de restricción son asimismo variables y van, en el caso de los países de la OCDE, generalmente, desde periodos inferiores a un año (Austria, Noruega) pudiendo incluso llegar a 2 años y más (Chipre y Alemania, por ejemplo), aunque en muchos de estos casos con ámbitos de restricción de empleo más acotados.

Algunos países regulan, a su vez, periodos de restricción distintos según el nivel o *seniority* del funcionario de que se trate o según la naturaleza del cargo o función específica que cumplió en el Estado (Eslovenia, algunos estados de Estados

¹ 21 países de la OECD (66%) tiene contemplados “Cooling off periods”, con reglas específicas y procedimientos.

Unidos). En otros casos, la restricción se plantea respecto de labores puntuales a realizar, *ex post*, en el sector privado y no como una restricción general para desempeñarse en un determinado sector (por ejemplo, quien cumplía funciones de adjudicar contratos en licitaciones estatales no puede tomar un empleo en alguna de las empresas beneficiadas con la licitación dentro del año siguiente a la adjudicación del contrato).

En otros países, no hay una restricción general -salvo en lo relativo a materias de lobby- sino que cada caso se evalúa, en su mérito, por una entidad independiente al gobierno de turno, la que revisa la solicitud del ex funcionario, sin que su pronunciamiento sea vinculante. Por su parte, y en diversos países, algunas categorías de funcionarios reciben compensaciones económicas durante este período de restricción. Esto ocurre en Austria, Israel, Noruega y España, entre otros. Algunos reciben hasta el 80% de su salario básico como compensación y, en otros casos, es completa, según el nivel de restricción.

En cualquier caso, las buenas prácticas regulatorias en la materia recomiendan que el tipo de restricción y el periodo de tiempo impuesto al efecto sean proporcionales a la eventual amenaza derivada del rol de ex funcionario público, -para no convertir la restricción en un desincentivo, *ex ante*, al ingreso al empleo público-, razonables y compensadas conforme al ámbito de la restricción de la libertad de trabajo.

- **Post empleo para ex ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicio y parlamentarios.**

En concreto, la iniciativa propone, con una redacción muy similar a la de la ley de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)², que una vez cesados en sus cargos, **y por el plazo de 1 año, los ex ministros de Estado, los ex subsecretarios y los ex jefes superiores de servicio** “no podrán prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de las instituciones fiscalizadoras que se relacionen con el Presidente de la República a través del respectivo Ministerio en que desempeñaron funciones, o que se relacionen con el Presidente de la República a través del Ministerio mediante el cual el servicio público en que desempeñaron funciones se relaciona con el Presidente de la República, cuando corresponda, si con respecto de las cuales, de forma específica, personal y directa, hayan emitido actos, resoluciones o dictámenes; participado en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiere adoptado algún acuerdo o resolución a su respecto; o intervenido en los procedimientos administrativos, finalizados o no, que produjeron o producirán dichos actos administrativos”. La prohibición se extiende a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial. Tampoco podrán realizar lobby y/o gestión de intereses particulares, por un período de 12 meses a contar de la fecha de cese en sus funciones, ante la misma institución en la que desempeñaron funciones³.

2 La que a su vez está basada en la legislación española (Ley 3/2015, Art. 15.3).

3 El proyecto de ley viene proponiendo idéntica prohibición a los ex funcionarios de organismos que detentan facultades fiscalizadoras, y que se hayan desempeñado hasta el 3° nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad

Más allá de la compleja formulación de la norma, en que por un lado se advierte un esfuerzo por acotar su alcance, pero por otro, se abren espacios para interpretar que ella podría tener un alcance más amplio dado el marco de acción regulatorio de los ministerios, el planteamiento tampoco se condice con la regulación más reciente en Chile, en términos de plazos y posibles compensaciones.

Así, por ejemplo, aun cuando la redacción se asemeja a la ley sobre la CMF, en el caso de los **ex comisionados y ex funcionarios de la CMF, el plazo impuesto para la misma hipótesis es de 6 meses**. Por su parte, la misma ley de la CMF establece otro plazo de 3 meses en el que tales personeros no podrán prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni adquirir participación en la propiedad, respecto de las entidades, en general, sujetas a fiscalización de la CMF, ni de aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas. Como la hipótesis o alcance de la restricción es más amplia que la anterior, el personal afecto tendrá derecho a percibir mensualmente una compensación económica equivalente al 75% de la remuneración que les correspondía percibir por el ejercicio de sus funciones. Por su parte, en la recientemente ingresada indicación del Ejecutivo respecto **del proyecto de ley de datos personales, se establece que los ex miembros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia no podrán, una vez cesados en el cargo y por un plazo de 3 meses** contados desde que la cesación se ha hecho efectiva, prestar ningún tipo de servicio, sea o no remunerado, ni adquirir participación en la propiedad, respecto de las entidades sujetas a la fiscalización del Consejo,

o su equivalente, según grado remuneratorio. Sin embargo, esta disposición genera una asimetría regulatoria respecto de la CMF, tratamiento disímil cuya justificación debiera explicitarse y eventualmente ser objeto de corrección en el debate.

ni de aquellas entidades que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas. Durante este período, los ex miembros del Consejo tendrán derecho a percibir mensualmente una compensación económica equivalente al 75% de la remuneración que les correspondía percibir por el ejercicio de sus funciones.

Para fiscalizar la restricción que se viene imponiendo, cada ministerio, servicio u organismo deberá llevar un registro público de las entidades privadas que se encuentren o hayan estado sujetas a fiscalización por las instituciones fiscalizadoras (asumimos a cuyo respecto haya tenido injerencia específica el ministro, subsecretario o jefe de servicio del caso). A mayor extensión del registro, más amplia será la aplicación de la restricción, con las dificultades que hemos analizado más arriba. Este registro implicará un nivel de burocracia no menor para cada ministerio. En este sentido, sería deseable simplificar la formulación de la restricción y su plazo, y no aumentar la burocracia para fiscalizar una norma compleja. Además, las ex autoridades y ex funcionarios afectos a las prohibiciones establecidas deberán informar al órgano al que pertenecían, durante el período que duren dichas prohibiciones, sus participaciones societarias y sus actividades laborales, sujetándose a multas a beneficio fiscal para el caso del incumplimiento.

En el caso del Poder Legislativo, el proyecto propone que los parlamentarios no puedan realizar actividades de lobby o gestión de intereses, por un período de 12 meses a contar de la fecha de cese en las funciones. Como se observa, la restricción no está acotada al posible lobby o gestión de intereses ante el Congreso Nacional, sino que abarca, en general, a las entidades del Estado, lo que podría resultar excesivo a la luz de las mismas normas que en la materia contiene el proyecto para otras autoridades en que se

acota al servicio o ministerio mismo del que se emigra. A su vez, se deben analizar con cuidado los efectos de la norma en términos de generar mayores incentivos a optar por la reelección, dada la restricción impuesta.

- **Extensión de la prohibición de uso de asignaciones parlamentarias**

El proyecto, al regular las asignaciones parlamentarias, señala que éstas deben ser utilizadas exclusivamente para el ejercicio de la función parlamentaria. Acto seguido, prohíbe destinar las asignaciones parlamentarias para la remuneración o cualquier tipo de pago, a cualquier título, de forma directa o indirecta, a las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de un diputado o senador, los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria.

La extensión señalada para los parientes de funcionarios relacionados a la actividad del Congreso distintos de los senadores y diputados puede resultar muy amplia en relación a los fines que se persiguen con el proyecto de ley. En este sentido, podría evaluarse la limitación de la prohibición, incorporando un mecanismo similar al filtro de mérito efectuado por la DNSC, a cargo de un algún órgano de control del propio Congreso, junto con la publicación del informe encargado en la página del Congreso.

- **Deber de abstención y conflictos de interés en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional**

El proyecto establece la prohibición de que los miembros de ambas cámaras puedan intervenir y votar en asuntos en los que un parlamentario tenga interés personal, incluyendo a diversos familiares entre los sujetos que generan deber de abstención. Actualmente, los parlamentarios no pueden votar ni promover dichos asuntos, pero sí intervenir y participar en el debate.

A este respecto, se considera que la exclusión de la discusión de quien tenga una inhabilidad podría traer consecuencias negativas, al perderse la posibilidad de conocer puntos de vista interesantes para el debate legislativo.

Por otra parte, el proyecto regula la forma en que se debe promover y materializar el deber de abstención que afecta a los miembros del Congreso, dando un rol protagónico a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria. Sin perjuicio de que esta innovación va en el sentido correcto -al establecer un plazo para que la Comisión referida resuelva e imponga sanciones-, conviene preguntarse sobre las razones relativas a la exclusión de la posibilidad de que un parlamentario pueda consultar a la Comisión sobre la eventual inhabilidad de otro parlamentario.

Adicionalmente, se debe tener especial cuidado de que, las sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de materializar el deber de abstención, sean lo suficientemente severas y disuasivas para lograr su objetivo. Asimismo, surgen dudas de lo que ocurriría en el evento de que una iniciativa legal se apruebe con el voto favorable de un parlamentario afectado

por la presente inhabilidad. Por un lado está el respeto de la voluntad soberana y representativa de los parlamentarios plasmada al momento de la votación, y el problema sobre cómo se resuelve el conflicto generado por la votación de quien debió inhabilitarse. Esta materia debiera ser estudiada con especial cuidado en la tramitación del proyecto de ley a fin de resolver el eventual conflicto sin afectar la voluntad democrática.

Sería adecuado establecer que, a fin de que no existan dudas al respecto, debiera consagrarse expresamente que una vez publicada la ley, ésta tiene plena vigencia, aun cuando algunos parlamentarios hayan incurrido en infracciones al deber de abstención, los que deberán ser sancionados de conformidad a lo que disponga la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y los reglamentos de las cámaras respectivas. Si, eventualmente, lo que se busca es cesar o poner término a los efectos de una determinada ley, se deberán utilizar las figuras de la derogación o modificación de una ley.

Finalmente, conviene recordar que en nuestra legislación es el Tribunal Constitucional el órgano llamado a pronunciarse sobre los vicios del procedimiento que ocurran durante la tramitación legislativa, según las reglas dispuestas en la Constitución, lo cual es válido hasta el momento de la publicación de la ley. Una vez publicada la norma, los vicios del procedimiento se sanean, sin que sea posible que sirvan de base a la anulación de la misma.

- **Restricciones ex ante para ser autoridad.**

El proyecto de ley propone modificar el artículo 55 bis de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, estableciendo una nueva inhabilidad para ser Ministro, Subsecretario, jefe superior de servicio y directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado.

En concreto, señala que los lobistas -debidamente inscritos en el registro correspondiente- que hubieren realizado ante el organismo en que se les pretende nombrar, cualquier actuación señalada en el numeral 1) del artículo 8^o de la ley 20.730, dentro de los 12 meses anteriores a su nombramiento, no podrán asumir dichos cargos.

En derecho comparado, es posible apreciar que las inhabilidades ex ante para el ejercicio de un cargo público son menos frecuentes que las inhabilidades ex post. La nueva inhabilidad que se viene proponiendo puede resultar extensa en cuanto al periodo de tiempo impuesto lo que se aleja de que ésta sea proporcional a la eventual amenaza que se intenta resguardar.

Asimismo, no se aborda la misma restricción para quienes obtengan un escaño en el Congreso Nacional⁵, cuya situación debiera tener una regulación análoga.

Sin perjuicio de lo anterior, si se pretenden modificar los requisitos de ingreso para los

4 Se refiere a "las audiencias y reuniones sostenidas que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares respecto de las decisiones que se señalan en el artículo 5°"

5 Ver artículo 57 de la Constitución Política de la República, que aborda las inhabilidades para ser candidato a diputado y senador.

Ministros⁶, estableciéndose al efecto requisitos especiales, debe considerarse la incorporación de la inhabilidad mediante la modificación de la Constitución Política de la República y no a través de la modificación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

- **Modificaciones a la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.**

El proyecto de ley modifica el Capítulo II de la referida ley, denominado “De los Requisitos para Contratar con la Administración del Estado”, ampliando la limitación de personas que no pueden contratar con la Administración.

En concreto, además de incluir a los directivos del órgano o empresa que contrata -incluyendo a las personas unidas por vínculo matrimonial, de acuerdo de unión civil o de parentesco, de conformidad a la letra b) del artículo 54 de la Ley de Bases de Administración del Estado- y a diferentes sociedades en las que aquellos formen

parte, extiende la prohibición a los funcionarios y/o empleados del órgano, empresa o corporación, según corresponda, que, en razón de su cargo, deban o puedan participar en la decisión de contratación de provisión de bienes o prestación de servicios, y a las personas relacionadas con ellos, de acuerdo a las hipótesis anteriormente descritas.

Así las cosas, la referida modificación es positiva y avanza en sentido correcto, evitando que funcionarios se aprovechen de su posición para obtener una influencia indebida.

Finalmente, conviene recordar que la prohibición⁷ comentada también se aplica a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, de los integrantes del Escalafón Primario del Poder Judicial y de los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.

- **Asimetría regulatoria para distintos funcionarios.**

La diferencia de trato con diferentes funcionarios de la Administración del Estado pareciera carecer de justificación y podría ser considerada una discriminación arbitraria. En atención a lo expuesto, conviene preguntarse ¿cuáles son las razones que justifican este tratamiento diferenciado?

6 Artículo 34 de la Constitución.

Artículo 34.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales a la Administración Pública.

En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.

7 Actual artículo 4 inciso 7 de la Ley 19.886 de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Regla general ⁸	Contraloría General de la República
<p>En caso que un nombramiento o contratación para ingresar a la Administración del Estado recaiga en el cónyuge, conviviente civil o un pariente por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado, de diferentes autoridades⁹, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento o contratación solicitará previamente informe a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Dicho informe será sometido a conocimiento del Consejo de Alta Dirección Pública, el cual deberá manifestar su parecer respecto del mismo (no siendo una opinión vinculante).</p>	<p>Los nombramientos y designaciones de personal a contrata no podrán recaer en quienes estén ligados entre sí por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o parentesco por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado, con el Contralor General de la República, el Subcontralor o con quien, en razón de su cargo, deba o pueda participar en la decisión de su nombramiento, ascenso, designación o contratación a cualquier título que se efectúe.</p>

⁸ Contenida en los nuevos incisos finales del artículo 16 de la LOC de Bases Generales de la Administración del Estado.

⁹ Tales como el Presidente de la República, Seremis, embajadores, entre otros.

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Modifícase el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el siguiente sentido:

1. Agrégase, en el artículo 16¹⁰, los siguientes incisos finales, nuevos:

“En caso que un nombramiento o contratación para ingresar a la Administración del Estado recaiga en el cónyuge, conviviente civil o un pariente por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento o contratación solicitará previamente informe, en los términos del artículo 38 de la Ley N° 19.880, a la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Para efectos de elaborar el informe señalado en el inciso anterior, la Dirección Nacional del Servicio Civil deberá considerar los años de experiencia del candidato, sus años de experiencia calificada, los conocimientos asociados a la función en la que se le pretende nombrar o contratar, así como su integridad.

El informe precedentemente señalado será sometido a conocimiento del Consejo de Alta Dirección Pública, el cual deberá manifestar su parecer respecto del mismo.

Un reglamento establecerá la forma, plazos y el procedimiento mediante el cual se elaborará y evacuará el informe señalado en los incisos anteriores.”

10 Artículo 16 vigente:

Artículo 16.- Para ingresar a la Administración del Estado se deberá cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el título III de esta ley, además de los exigidos para el cargo que se provea.

Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de Administración del Estado, previo concurso.

[...] [...] [...] [...]

2. Introdúcense en el artículo 54 las siguientes modificaciones:

- a) Agrégase en el segundo párrafo de la letra a), a continuación de la expresión “cónyuge,” la expresión “conviviente civil,”.
- b) Agrégase en la letra b), a continuación de la expresión “cónyuge,” la expresión “conviviente civil,”.
- c) “Agrégase el siguiente literal d), nuevo:

“d) Quienes hayan sido sancionados por infracción a los deberes establecidos en los artículos 57¹¹ y 58¹², durante los cinco años anteriores a su nombramiento.”¹³.

3. Agrégase, en el artículo 55¹⁴, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para los efectos de lo señalado en el artículo 16, en caso que el cónyuge, conviviente civil, o algún pariente, por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, del postulante desempeñe funciones en calidad de Presidente de la República, ministro de Estado, subsecretario, delegado presidencial regional, delegado presidencial provincial, gobernador regional, secretario regional ministerial, jefe superior de servicio, embajador, alcalde, senador o diputado, dicha circunstancia deberá ser indicada en la declaración jurada establecida en el inciso anterior, señalando la institución y cargo desempeñado.”.

11 Véase el numeral 6 del artículo primero del proyecto de ley.

12 Véase el numeral 7 del artículo primero del proyecto de ley.

13 El artículo 54 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:

- a) Las personas que tengan vigente o suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientos unidades tributarias mensuales o más, con el respectivo organismo de la Administración Pública. Tampoco podrán hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la institución de que se trata, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, conviviente civil, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule;
- b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive;
- c) Las personas que se hallen condenadas por crimen o simple delito;
- d) Quienes hayan sido sancionados por infracción a los deberes establecidos en los artículos 57 y 58, durante los cinco años anteriores a su nombramiento.

14 Artículo 55 vigente:

Artículo 55.- Para los efectos del Artículo anterior, los postulantes a un cargo público deberán prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentran afectos a alguna de las causales de inhabilidad previstas en ese artículo.

[...]

4. Agregase, en el artículo 55 bis¹⁵, el siguiente inciso final, nuevo:

“Asimismo, no podrán desempeñar las funciones de Ministro, Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, los lobistas que aparezcan inscritos en el registro a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 20.730¹⁶, cuando hubieren realizado ante el organismo respectivo las actuaciones señaladas en el numeral 1) del artículo 8° de esa ley, según corresponda, dentro de los doce meses anteriores a su nombramiento.”.

5. Suprímese el inciso final del artículo 56¹⁷.

6. Agrégase el siguiente artículo 57, nuevo:

“Artículo 57.- Una vez cesados en sus cargos, y por el plazo de un año, los ex ministros de Estado, los ex subsecretarios y los ex jefes superiores de servicio no podrán prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización de instituciones fiscalizadoras que se relacionen con el Presidente de la República a través del respectivo Ministerio en que desempeñaron funciones, o que se relacionen con el Presidente de la República a través del Ministerio mediante el cual el servicio público en que desempeñaron funciones se relaciona con el Presidente de la República, cuando corresponda, si con respecto de las cuales, de forma específica, personal y directa, hayan emitido actos, resoluciones o dictámenes; participado en sesiones de órganos colegiados en las que se

15 Artículo 55 bis vigente:

Artículo 55 bis.- No podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencias de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad.

[...].

16 Ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

17 El artículo 56 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 56.- Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley.

Estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Asimismo, son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del artículo 54 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación.

Del mismo modo son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en sus funciones.”.

hubiere adoptado algún acuerdo o resolución a su respecto; o intervenido en los procedimientos administrativos, finalizados o no, que produjeron o producirán dichos actos administrativos.

Los funcionarios mencionados en el inciso anterior tendrán prohibido realizar lobby y/o gestión de intereses particulares, por un período de doce meses a contar de la fecha de cese en sus funciones, ante la misma institución en la que desempeñaron funciones.

La prohibición que trata este artículo se extiende a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos de la Ley N° 18.045¹⁸.”.

7. Agrégase el siguiente artículo 58, nuevo:

“Artículo 58.- Una vez cesados en sus cargos, y por un plazo de un año, los ex funcionarios de la Dirección General de Aguas, la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, el Servicio Nacional de Pesca, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Casinos de Juego, la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y la Superintendencia del Medio Ambiente, y que se hayan desempeñado hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente, según grado remuneratorio o, en su defecto, según el monto de las remuneraciones de carácter permanente, y las personas que hayan prestado servicios a cualquier título y hayan percibido una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, no podrán prestar ningún tipo de servicio, gratuito o remunerado, ni adquirir participación en la propiedad de entidades privadas que hayan estado sujetas a la fiscalización del organismo en que se hayan desempeñado ni de aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de éstas en los términos de la Ley N° 18.045.

18 Ley de Mercado de Valores.

Artículo 96.- Forman parte de un mismo grupo empresarial:

- a) Una sociedad y su controlador;
- b) Todas las sociedades que tienen un controlador común, y este último, y
- c) Toda entidad que determine la Superintendencia considerando la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias:
 - 1. Que un porcentaje significativo del activo de la sociedad está comprometido en el grupo empresarial, ya sea en la forma de inversión en valores, derechos en sociedades, acreencias o garantía;
 - 2. Que la sociedad tiene un significativo nivel de endeudamiento y que el grupo empresarial tiene importante participación como acreedor o garante de dicha deuda;
 - 3. Que la sociedad sea miembro de un controlador de algunas de las entidades mencionadas en las letras a) o b), cuando este controlador corresponda a un grupo de personas y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial, y
 - 4. Que la sociedad sea controlada por uno o más miembros del controlador de alguna de las entidades del grupo empresarial, si dicho controlador está compuesto por más de una persona, y existan razones fundadas en lo dispuesto en el inciso primero para incluirla en el grupo empresarial.

Los funcionarios mencionados en el inciso anterior que hayan sido sujetos pasivos de acuerdo a la Ley N° 20.730, no podrán realizar lobby y/o de gestión de intereses particulares por un período de doce meses a contar de la fecha de cese en sus funciones, ante la misma institución en la que desempeñaron funciones.”.

8. Agrégase el siguiente artículo 59, nuevo:

“Artículo 59.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en los artículos 57 y 58 de esta ley deberán mantener un registro público de las entidades privadas que se encuentren o hayan estado sujetas a fiscalización por las instituciones fiscalizadoras señaladas en el artículo 58, con indicación de aquellas que se relacionen con el Presidente de la República a través del respectivo Ministerio del que dependen, en conformidad a lo establecido en los artículos 57 y 58 de esta ley.

Este registro deberá actualizarse cada mes y publicarse conforme al artículo 7°¹⁹ de la Ley sobre transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado.

Las ex autoridades y ex funcionarios afectos a las prohibiciones establecidas en los artículos 57 y 58 deberán informar al órgano al que pertenecían, durante el período que duren dichas prohibiciones, sus participaciones societarias y todas las actividades laborales y de prestación de servicios que realicen, tanto en el sector público como en el sector privado, sean o no remuneradas. Esta obligación se materializará en la forma que indicará el reglamento.

Si una persona obligada a informar en conformidad a lo establecido el inciso anterior no lo realiza dentro del plazo dispuesto para ello o informa de manera incompleta o inexacta, la Contraloría General de la República de oficio o a petición fundada de cualquier interesado deberá apercibir al infractor para que informe o rectifique la información dentro del plazo de diez días hábiles, notificándolo por carta certificada, conforme a lo establecido en el artículo 46²⁰ de la Ley N°19.880.

19 Artículo 7 de la Ley 20.285.-

Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: (...).

20 Ley que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Artículo 46.- Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio en que el interesado hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.

Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el expediente la debida recepción. Si el interesado requiere copia del acto o resolución que se lo notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento.

Si tras el apercibimiento se mantuviera el incumplimiento, la Contraloría formulará cargos y el obligado tendrá el plazo de diez días hábiles para contestarlos. En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días hábiles. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, siendo ésta apreciada conforme a las reglas de la sana crítica.

La Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, mediante resolución fundada, procederá a aplicar al infractor una multa a beneficio fiscal de 1⁰²¹ a 100 unidades tributarias mensuales. Contra dicha resolución podrá apelarse en los términos del artículo 60²².

Con todo, si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los seis meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave y dará lugar a una nueva aplicación de la multa hasta por el doble de lo aplicado originalmente. Contra dicha resolución podrá apelarse en los términos del artículo 60.

Las multas establecidas en este artículo procederán sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente.”.

9. Agrégase el siguiente artículo 60, nuevo:

“La infracción de ex autoridades y ex funcionarios a las prohibiciones a que se refieren los artículos 57 y 58 será sancionada con multa a beneficio fiscal entre 100²³ y 2.000 unidades tributarias mensuales. Adicionalmente, el infractor quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado a cualquier título por cinco años.

Las personas naturales o jurídicas sujetas a fiscalización por las instituciones señaladas en el inciso 1° del artículo 58 de la presente ley que constituyan vínculos laborales o reciban prestación de servicios por parte de ex autoridades y ex funcionarios relacionados con la institución respectiva en los términos del artículo 57, o que hayan desempeñado funciones en la misma según lo dispuesto del artículo 58, serán sancionadas por la institución fiscalizadora respectiva con multa a beneficio fiscal entre 100 y 2.000 unidades tributarias mensuales. Esta prohibición se extenderá a aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en los términos de la Ley N° 18.045²⁴.

Para la determinación de las sanciones especificadas en este artículo, se considerarán las siguientes circunstancias:

21 476.810 a 4.768.100 pesos.

22 Véase el numeral noveno del artículo primero del proyecto de ley.

23 4.768.100 a 93.362.000 pesos.

24 Véase nota a pie de página al número 7 del artículo primero del proyecto de ley.

- a) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.
- b) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.
- c) La conducta anterior del infractor.
- d) La capacidad económica del infractor.
- e) La responsabilidad de las ex autoridades y ex funcionarios por infracción a lo dispuesto en los artículos 57 y 58, se hará efectiva por la Contraloría General de la República conforme a los artículos 134²⁵, 135²⁶ y 138²⁷ del Decreto Supremo N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, para lo cual el instructor poseerá un plazo de 20 días hábiles administrativos.

Las sanciones que imponga la Contraloría General de la República serán reclamables ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución. La Corte de Apelaciones pedirá informe a la Contraloría, el que deberá ser evacuado dentro de los diez días hábiles siguientes al requerimiento. Para el conocimiento, vista y fallo de estas cuestiones, se aplicarán las normas sobre las apelaciones de los incidentes en materia civil, con preferencia para su vista y fallo. Respecto de la resolución que falle este asunto, no procederán recursos ulteriores. La interposición de la reclamación suspenderá la aplicación de la sanción impuesta por la resolución recurrida.

La responsabilidad por las infracciones tratadas en este artículo prescribirá una vez transcurridos cinco años desde su comisión.”.

25 Artículo 134.- Los sumarios administrativos serán el medio formal de establecer hechos sujetos a una investigación.

Los sumarios se tramitarán por escrito, agregando unas a otras, las aseveraciones que se hagan y que deberán llevar la firma de los funcionarios o personas declarantes y la del delegado.

Al respectivo expediente se agregarán, si los hubiere, los documentos o piezas que sirvan de fundamento o parte de prueba de los hechos.

Igualmente, se agregarán las piezas o documentos que el Fiscal ordene de oficio agregar. Agotada la investigación, por los medios más directos y pertinentes, se cerrará el sumario, previo los careos y ratificaciones a que hubiere lugar.

De los cargos que resultaren del sumario se dará conocimiento personal e individualmente al funcionario o funcionarios afectados, estampando en el expediente las respectivas declaraciones o descargos y agregando las piezas documentales que se presenten o entreguen por dichos funcionarios.

Una vez presentados los descargos o vencido el plazo otorgado al efecto sin que el inculpado los hubiere presentado, se dictará por el investigador una vista fiscal en que se consignen en forma clara y precisa los hechos establecidos y la responsabilidad que se derive del sumario.

El expediente, con su respectiva vista fiscal, se elevará al Departamento de Inspección, para que se adopten o propongan las medidas definitivas que procedan.

26 Artículo 135.- Los sumarios instruidos por la Contraloría serán secretos y el funcionario que dé informaciones sobre ellos será sancionado hasta con la destitución.

27 Artículo 138.- En los casos en que proceda la suspensión de funcionarios, el delegado dará inmediatamente cuenta al Contralor y a la Tesorería que corra con el pago de sueldos del funcionario suspendido.

La suspensión como media preventiva durará el tiempo que sea necesario para la investigación, a menos que se aplique como medida disciplinaria, caso en el cual se estará a lo que disponga el Estatuto Administrativo respecto a los funcionarios públicos civiles, o a las leyes y reglamentos especiales de los Servicios según corresponda.

10. Modifícase el primer párrafo del numeral 6° del artículo 62, en el siguiente sentido:

- a) Intercálase, a continuación de la palabra “cónyuge,” la expresión “conviviente civil,”.
- b) Sustitúyese la expresión “hasta el tercer grado” por “hasta el cuarto grado”.
- c) Sustitúyese en el párrafo final, el punto y coma (;) por punto (.).
- d) Agrégase el siguiente párrafo final, nuevo:

“En los órganos colegiados, ante la inhabilidad de uno de sus miembros, a falta de reglas especiales en los estatutos respectivos, el acuerdo o votación se celebrará sin considerar al miembro inhabilitado para determinar el quórum respectivo;”²⁸.

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el siguiente sentido:

- 1. Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “por matrimonio,” la expresión “por acuerdo de unión civil o”.
- 2. Agrégase, en el inciso primero, a continuación de la expresión “relación jerárquica”, la siguiente frase: “, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”²⁹.

28 El artículo 62 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, las siguientes conductas: 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, conviviente civil, hijos, adoptados o parientes ~~hasta el tercer grado de consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad~~ y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta.

En los órganos colegiados, ante la inhabilidad de uno de sus miembros, a falta de reglas especiales en los estatutos respectivos, el acuerdo o votación se celebrará sin considerar al miembro inhabilitado para determinar el quórum respectivo.

29 Artículo 85 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 85.- En una misma institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por matrimonio, por acuerdo de unión civil o, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca.

3. Reemplazase el inciso final por el siguiente:

“En caso que un nombramiento o contratación para ingresar a la Administración del Estado recaiga en el cónyuge, conviviente civil o un pariente por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, gobernadores regionales, secretarios regionales ministeriales, jefes superiores de servicio, embajadores, alcaldes, senadores y diputados, la autoridad facultada para efectuar el nombramiento o contratación solicitará informe, en los términos del artículo 38³⁰ de la Ley N° 19.880, a la Dirección Nacional del Servicio Civil, según lo dispuesto en el artículo 16³¹ del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.”.

Artículo 3°.- Modifícase el Decreto Supremo N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en su artículo 49³², los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos:

~~Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios de su dependencia.-~~

[...].

30 Artículo 38.- Valor de los informes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

Si el informe debiera ser emitido por un órgano de la Administración distinto del que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuada, se podrán proseguir las actuaciones.

31 Artículo 16.- Para ingresar a la Administración del Estado se deberá cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que determine el respectivo estatuto y con los que establece el Título III de esta ley, además de los exigidos para el cargo que se provea.

Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de la Administración del Estado, previo concurso.

32 Artículo 49 vigente:

Artículo 49.- Los nombramientos y ascensos del personal de la Contraloría se harán en conformidad a las disposiciones que contiene esta ley, debiendo recaer los ascensos en empleados de la misma oficina.

El ascenso a empleos de grado b) o superior podrá recaer en algún empleado que pertenezca a cualquiera de los dos grados inmediatamente inferiores al empleo vacante, siempre que el empleado tuviere, a juicio del Contralor, notas favorables en su hoja de servicios que lo hicieren merecedor de tal ascenso.

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, no serán considerados para el ascenso aquellos empleados que hubieren tenido durante los últimos doce meses, en su hoja de servicios, anotaciones desfavorables, que, a juicio del Contralor, no los hicieren merecedores de tal ascenso.

[...]

“Con todo, los nombramientos y la designación de personal a contrata no podrán recaer en quienes estén ligados entre sí por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o parentesco por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado, con el Contralor General de la República, el Subcontralor o con quien, en razón de su cargo, deba o pueda participar en la decisión de su nombramiento, ascenso, designación o contratación a cualquier título que se efectúe.

La infracción a lo establecido en el inciso anterior será considerada falta grave a la probidad administrativa.”.

2. Agrégase el siguiente artículo 51° bis, nuevo:

“Los abogados que se retiren del Servicio no podrán realizar presentaciones ante la Contraloría General de la República, durante el plazo de un año contado desde la fecha de cese de funciones, representando intereses de terceros, respecto de asuntos que, por razón de sus funciones, hubieren tenido conocimiento o intervención.

Asimismo, ningún abogado que se retire de algún otro servicio de la administración centralizada o descentralizada del Estado, donde haya prestado sus servicios, podrá realizar presentaciones ante la Contraloría General de la República representando intereses de terceros, actuando como abogado, apoderado o representante, en contra del Servicio o institución a la que pertenecía, en asuntos en que, en razón de sus funciones, hubiere tenido conocimiento o intervención, durante un año con posterioridad a su retiro. Tampoco podrá actuar como contradictor en juicios en que Servicio o institución a la que pertenecía tenga interés, durante un año con posterioridad a su retiro.”.

[...]

Artículo 4°.- Reemplázase, en el numeral 2 del inciso 2° del artículo 12 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, la palabra “Tener” por la siguiente expresión “Ser cónyuge o conviviente civil, hijo, adoptado, o tener” ³³.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios:

1. Sustitúyese su inciso sexto³⁴ por el siguiente:

“Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o de parentesco, en conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo 54³⁵ del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con empresas individuales de responsabilidad limitada de aquellos o de éstas, ni con sociedades en comandita por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades por acciones o anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o

33 Artículo 12 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 12.- Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo precedente.

Son motivos de abstención los siguientes:

2. ~~Tener~~ Ser cónyuge o conviviente civil, hijo, adoptado o tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociados con éstos para asesoramiento, la representación o el mandato.

34 Inciso sexto que se deroga es el siguiente:

Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

35 Artículo 54.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:

b) Las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administración civil del Estado al que postulen, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.

más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.”.

2. Agrégase el siguiente inciso séptimo, nuevo:

“La prohibición establecida en el inciso anterior se extenderá a los funcionarios y/o empleados del órgano, empresa o corporación, según corresponda, que, en razón de su cargo, deban o puedan participar en la decisión de contratación de provisión de bienes o prestación de servicios, y a las personas relacionadas con ellos, de acuerdo a las hipótesis descritas en el inciso anterior.”.

3. Reemplázase, en su inciso octavo, la expresión “en el inciso anterior” por “en los incisos anteriores”³⁶.

Artículo 6°.- Modifícase la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en el artículo 2°, los siguientes incisos cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser el inciso sexto, y así sucesivamente:

“Con todo, no podrán ingresar a desempeñar función alguna en el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional o en cualquier servicio común, las personas que estén ligadas por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o parentesco por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado, con senadores, diputados, secretarios de ambas cámaras, o con quien, en razón de su cargo, deba o pueda participar en la decisión de su nombramiento, designación o contratación para su ingreso a dichas corporaciones o entidades, a cualquier título que se efectúe.

La incompatibilidad establecida en el inciso anterior se extenderá solamente durante el periodo en que las autoridades precedentemente señaladas desempeñen funciones.”³⁷

2. Agrégase, en el artículo 5° A, el siguiente inciso final, nuevo:

36 El artículo 4 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se adjunta en el Anexo I con sus modificaciones.

37 El artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso por su extensión, se adjunta en el Anexo II con sus modificaciones.

“La Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria de cada cámara tendrá una Unidad Técnica de Apoyo, la cual será integrada por dos funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes darán soporte al funcionamiento de la comisión respectiva.”³⁸

3. Modifícase el artículo 5° B en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover, intervenir, ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, convivientes civiles, hijos, adoptados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive.”

b) Agréganse los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto y sexto:

“Los parlamentarios podrán consultar, a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria respectiva, respecto de las eventuales inhabilidades que les afecten a sí mismos.

La consulta sólo podrá promoverse por el parlamentario afectado y deberá ser resuelta por la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria respectiva, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la inhabilidad sea promovida. Este procedimiento en ningún caso suspenderá la tramitación de un proyecto de ley y mientras no se resuelva la inhabilidad el parlamentario no se entenderá inhabilitado

En caso que la inhabilidad se promueva por el respectivo parlamentario con posterioridad a la votación del asunto que le dé lugar, el diputado o senador que haya infringido lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, será sancionado por la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria, de conformidad a esta ley.

Las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria deberán publicar, en el sitio web de la corporación respectiva, un informe mensual de todas las solicitudes de inhabilitación y de lo resuelto conforme a este artículo.”³⁹

38 El artículo 5° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso por su extensión, se adjunto en el Anexo III con sus modificaciones.

39 Artículo referido quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 5° B.- ~~Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiéndole previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto.~~

Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover, intervenir, ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, convivientes civiles, hijos, adoptados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad inclusive.

No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.

Los parlamentarios podrán consultar, a la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria respectiva, respecto de las eventuales inhabilidades que les afecten a sí mismos.

4. Incorpórase el siguiente artículo 5° C, nuevo:

“Artículo 5C.- Una vez que cesen funciones, los ex diputados y ex senadores tendrán prohibido realizar lobby o gestión de intereses particulares, por un período de un año a contar de la fecha de cese en sus funciones.”.

5. Agrégase en el artículo 5° F⁴⁰ los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Los diputados y senadores no podrán percibir remuneraciones ni honorarios profesionales provenientes de fuentes diversas a la señalada en el artículo 62 de la Constitución Política de la República, durante el periodo parlamentario para el que fueron electos.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los diputados y senadores podrán recibir remuneraciones y/u honorarios profesionales por el desempeño de labores docentes por hasta un máximo de doce horas semanales.”.

6. Intercálanse, en el artículo 66, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso tercer a ser quinto, y así sucesivamente:

“Las asignaciones parlamentarias deben ser utilizadas exclusivamente para el ejercicio de la función parlamentaria.

Se prohíbe destinar las asignaciones tratadas en este artículo para la remuneración o cualquier tipo de pago, a cualquier título, de forma directa o indirecta, a las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de un diputado o senador, los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria.” ⁴¹.

La consulta sólo podrá promoverse por el parlamentario afectado y deberá ser resuelta por la Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria respectiva, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que la inhabilidad sea promovida. Este procedimiento en ningún caso suspenderá la tramitación de un proyecto de ley y mientras no se resuelva la inhabilidad el parlamentario no se entenderá inhabilitado.

En caso que la inhabilidad se promueva por el respectivo parlamentario con posterioridad a la votación del asunto que le dé lugar, el diputado o senador que haya infringido lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, será sancionado por la respectiva Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria, de conformidad a esta ley.

Las Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria deberán publicar, en el sitio web de la corporación respectiva, un informe mensual de todas las solicitudes de inhabilitación y de lo resuelto conforme a este artículo”.

40 El artículo 5° F vigente:

Artículo 5° F.- Es deber de los parlamentarios asistir a las sesiones de la Cámara y de las comisiones a que pertenezcan.

[...][...]

41 El artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso por su extensión, se adjunta en el Anexo IV con sus modificaciones.

Artículo 7°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses, en el siguiente sentido:

1. Agrégase en su inciso segundo, a continuación de la expresión “conviviente civil”, la siguiente frase: “, indicando institución y cargo, en caso de desempeñar funciones en algún órgano del Estado”.
2. Agrégase en su inciso tercero, a continuación de la expresión “y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad.”, la siguiente frase: “, indicando institución y cargo, en caso de desempeñar funciones en algún órgano del Estado.”⁴².

Artículo 8°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República y Dirección Nacional del Registro Civil. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

42 Incisos segundo y tercero del Artículo 7° quedarían con la siguiente redacción:

La declaración deberá incluir asimismo el nombre completo del declarante y de su cónyuge o conviviente civil, indicando institución y cargo, en caso de desempeñar funciones en algún órgano del Estado.

Tratándose de los sujetos señalados en los números 1 a 4 del artículo 4°, y de los sujetos a que se refiere el Capítulo 3° de este Título, además deberá incluirse el nombre completo de sus parientes por consanguinidad en toda la línea recta que se encuentren vivos y en el segundo grado tanto en la línea colateral como por afinidad, indicando institución y cargo, en caso de desempeñar funciones en algún órgano del Estado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Los reglamentos señalados en la presente ley deberán ser dictados dentro del plazo de 3 meses contados desde la publicación de la presente ley.

Artículo segundo.- La presente ley entrará en vigencia 3 meses después de la última publicación de los reglamentos señalados en el artículo anterior.

Artículo tercero.- Las disposiciones de la presente ley que modifican los artículos 16 y 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el inciso final del artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y, el artículo 2° de la Ley N° 18.918, se aplicarán a los nombramiento y contrataciones señalados en ellos y que se produzcan una vez entrada en vigencia las disposiciones de la presente ley.

Artículo cuarto.- Las disposiciones de la presente ley que establecen los nuevos artículos 57 y 58 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como aquella que modifica el artículo 5°C de la Ley N° 18.918, se aplicarán a las personas que, al momento de entrar en vigencia la presente ley, estuvieren en ejercicio de las funciones o cargos cuyo cese se regula.”.

ANEXO I

Artículo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, quedaría con la siguiente redacción:

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores, al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

En caso de que la empresa que obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa referida no podrá participar.

Si la empresa prestadora del servicio, subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.

Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.

El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.

Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o de parentesco, en conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo 54 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con empresas individuales de responsabilidad limitada de aquellos o de éstas, ni con sociedades en comandita por acciones o anónimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades por acciones o anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas

La prohibición establecida en el inciso anterior se extenderá a los funcionarios y/o empleados del órgano, empresa o corporación, según corresponda, que, en razón de su cargo, deban o puedan participar en la decisión de contratación de provisión de bienes o prestación de servicios, y a las personas relacionadas con ellos, de acuerdo a las hipótesis descritas en el inciso anterior.⁴³

Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto ~~en el inciso anterior~~ en los incisos anteriores serán nulos y los funcionarios que hayan participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 del inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que corresponda.

Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética.

43 El proyecto de ley no es preciso (artículo 5, número 2), dado que no se trata de un nuevo inciso séptimo sino que del reemplazo del mismo.

ANEXO II

Artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, quedaría con la siguiente redacción:

Quedarán sujetas a las normas de esta ley la tramitación interna de los proyectos de ley y de reforma constitucional; la aprobación o rechazo de los tratados internacionales; la calificación de las urgencias; las observaciones o vetos del Presidente de la República; las acusaciones que formule la Cámara de Diputados y su conocimiento por el Senado, y el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras.

Las disposiciones sobre nombramiento, promoción, deberes, derechos, responsabilidad, cesación de funciones y, en general, todas las normas estatutarias relativas al personal del Senado y de la Cámara de Diputados, incluidos los requisitos para servir los cargos, se establecerán en un reglamento interno de cada Cámara, a proposición de la Comisión de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobado con las formalidades que rigen, dentro de cada Corporación, para la tramitación de un proyecto de ley. En el caso de la Biblioteca del Congreso Nacional, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, del Comité de Auditoría Parlamentaria y de los servicios comunes, dichos reglamentos serán aprobados con las formalidades que rigen la tramitación de un proyecto de ley, a propuesta de la Comisión de Biblioteca o de la Comisión Bicameral en su caso. En todos estos reglamentos se dispondrá que el ingreso al servicio se efectúe siempre previo concurso público.

Cualquier materia no tratada específicamente en los reglamentos internos indicados en el inciso anterior, se regirá supletoriamente por las disposiciones aplicables al personal de la Administración Pública.

Con todo, no podrán ingresar a desempeñar función alguna en el Senado, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional o en cualquier servicio común, las personas que estén ligadas por vínculo matrimonial, acuerdo de unión civil o parentesco por consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo grado, con senadores, diputados, secretarios de ambas cámaras, o con quien, en razón de su cargo, deba o pueda participar en la decisión de su nombramiento, designación o contratación para su ingreso a dichas corporaciones o entidades, a cualquier título que se efectúe.

La incompatibilidad establecida en el inciso anterior se extenderá solamente durante el periodo en que las autoridades precedentemente señaladas desempeñen funciones.

Una Comisión Bicameral integrada por cuatro Senadores y cuatro Diputados tendrá a su cargo la supervigilancia de la administración de los servicios comunes. Su quórum para sesionar será de cuatro

miembros, de los cuales dos deberán ser Senadores y dos Diputados, y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta. Actuará como Secretario de la Comisión Bicameral el Secretario de la Comisión de Régimen Interior del Senado. La Comisión de Biblioteca estará compuesta por los Presidentes de ambas Corporaciones. Actuará como Secretario de ella el Director de ese Servicio.

Cada Cámara deberá tener una Comisión de Régimen encargada de la supervigilancia del orden administrativo e interno de los servicios de la respectiva Corporación. La Comisión de Biblioteca tendrá a su cargo la supervigilancia de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Estas Comisiones tendrán las demás atribuciones que les confieren la ley y los Reglamentos de cada Cámara.

A los Secretarios de la Cámara de Diputados y del Senado les corresponderá la administración del personal y de los distintos servicios de la respectiva Corporación, en su calidad de jefes superiores de Servicio. Iguales facultades y atribuciones corresponderán al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, con respecto a ese Servicio.

Fijase la siguiente planta para el personal del Senado: (...)

Fijase la siguiente Planta para el personal de la Cámara de Diputados: (...)

Fijase la siguiente planta para el personal de la Biblioteca del Congreso Nacional: (...)

En los sistemas de remuneraciones se establecerá un trato igualitario entre el personal de ambas Cámaras, de modo que, a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, les sean asignadas iguales retribuciones económicas.

Las remuneraciones e ingresos que perciban los funcionarios serán imponibles en conformidad a la ley. En todo caso, el monto máximo de imponibilidad será el establecido en el artículo 5° del decreto ley N° 3.501, de 1980.

Las resoluciones relativas a la carrera funcionaria del personal del Congreso Nacional se enviarán a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.

ANEXO III

Artículo 5° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, quedaría con la siguiente redacción:

Los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras.

El principio de probidad consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular.

El principio de transparencia consiste en permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones en la Sala y en las comisiones, así como las Cámaras y sus órganos internos, y de sus fundamentos y de los procedimientos que utilicen.

Las sesiones de las Cámaras, los documentos y registros de las mismas, las actas de sus debates, la asistencia y las votaciones serán públicas.

Serán públicos los acuerdos adoptados por las comisiones, así como los antecedentes considerados en sus sesiones y la asistencia de los parlamentarios e invitados a las sesiones de las mismas. Al término de cada sesión de comisión se informará resumidamente de lo anterior. La misma regla se aplicará a los comités parlamentarios.

Los informes de comisión serán públicos desde que queden a disposición de la respectiva Sala. Dichos informes darán cuenta de los asistentes a sus sesiones, de sus debates, de los antecedentes y documentos considerados, de los acuerdos alcanzados y sus fundamentos esenciales y del resultado de las votaciones, debidamente individualizadas.

Las sesiones de comisión se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

Los materiales de registro de las secretarías de las comisiones y de los comités parlamentarios, tales como grabaciones, apuntes u otros instrumentos de apoyo a esa labor, no serán públicos.

Cuando la publicidad de las sesiones y de los antecedentes considerados por la Sala y las comisiones afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la

seguridad de la Nación o el interés nacional, el Presidente de la respectiva Corporación o comisión, con el voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, en el primer caso, o de los dos tercios de los integrantes de la comisión, en el segundo, podrá declarar el secreto dejando constancia de los fundamentos de tal declaración. En todo caso, no serán públicas las sesiones y votaciones del Senado en que se resuelvan rehabilitaciones de ciudadanía.

Las sesiones, documentos, antecedentes, actas y votaciones serán siempre secretos cuando se refieran a asuntos cuya discusión, en esa calidad, haya solicitado el Presidente de la República, en conformidad con el número 15° del artículo 32 de la Constitución Política de la República.

Cada Cámara deberá tener una Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria encargada de velar, de oficio o a petición de un parlamentario, por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, y de conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria de los miembros de sus respectivas Corporaciones. Cada Cámara elegirá a los integrantes de estas comisiones por los tres quintos de sus miembros en ejercicio. No podrán formar parte de ellas los miembros de la Mesa de cada Corporación. La comparecencia ante dichas comisiones será obligatoria para el senador o diputado que hubiere sido citado, previo acuerdo adoptado por los dos tercios de sus integrantes, en sesión especialmente convocada al efecto. Los reglamentos de cada Cámara deberán establecer el procedimiento mediante el cual se elegirá a sus integrantes, los tipos de amonestación y el monto de las multas que podrán imponer y el quórum para sesionar y adoptar sus acuerdos y resoluciones, los que serán públicos cuando tengan el carácter de definitivos o así lo acuerde la comisión.

La Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria de cada cámara tendrá una Unidad Técnica de Apoyo, la cual será integrada por dos funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes darán soporte al funcionamiento de la comisión respectiva.

ANEXO IV

Artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, quedaría con la siguiente redacción:

El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias determinará, con cargo al presupuesto del Congreso Nacional y conforme a los principios que rigen la actividad parlamentaria, el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria. Para efectuar dicha labor, el Consejo oirá a las Comisiones de Régimen Interior del Senado y de Régimen Interno de la Cámara de Diputados.

Se entenderá por función parlamentaria todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes. Ella comprende la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquéllos y los comités parlamentarios.

Las asignaciones parlamentarias deben ser utilizadas exclusivamente para el ejercicio de la función parlamentaria.

Se prohíbe destinar las asignaciones tratadas en este artículo para la remuneración o cualquier tipo de pago, a cualquier título, de forma directa o indirecta, a las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de un diputado o senador, los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional, los abogados secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias o el Comité de Auditoría Parlamentaria.

El Consejo estará integrado por: (...)



VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.LYD.ORG

ACÁ PODRÁS ENCONTRAR TODOS NUESTROS
ESTUDIOS, ANÁLISIS DE LA CONTINGENCIA,
COLUMNAS DE OPINIÓN Y MUCHO MÁS!



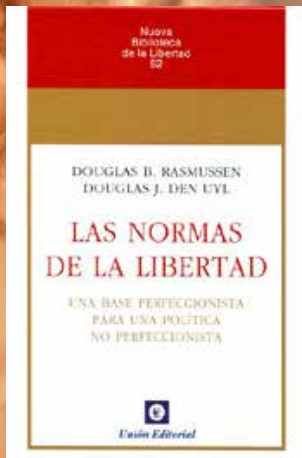
LIBERTAD Y DESARROLLO
Alcántara 498, Las Condes | Santiago de Chile
Fono: +56 2 2377 4800 | E-mail: lyd@lyd.org

LD
LIBERTAD Y DESARROLLO

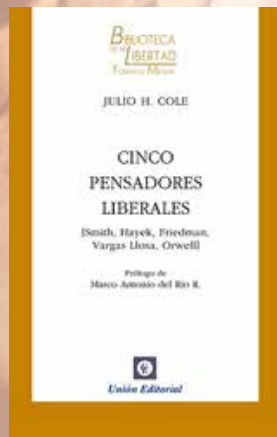


Unión Editorial

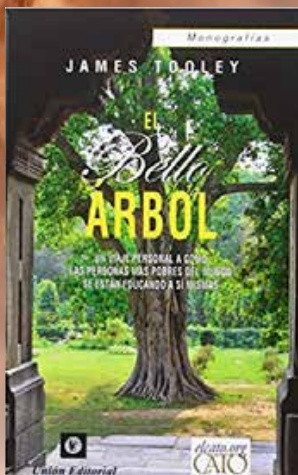
LyD representante exclusivo de
Unión Editorial en Chile



Las Normas de la Libertad,
de Douglas B. Rasmussen y
Douglas J. Den Uyl



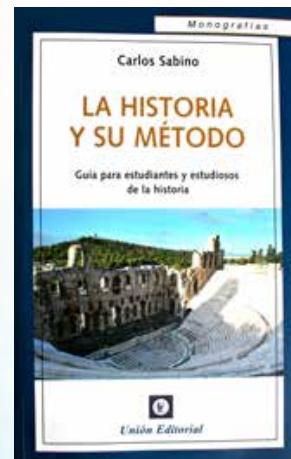
Cinco pensadores liberales
(Smith, Hayek, Friedman,
Vargas Llosa, Orwell),
de Julio H. Cole



El bello árbol,
de James Tooley



**La Economía explicada
a mis hijos,**
de Martín Krause



La historia y su método,
de Carlos Sabino

**Más de 300
títulos
disponibles**

